

El 11,7% de los hogares catalanes viven con inestabilidad laboral grave

- Lo destaca la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, a partir del informe [Vulneración de derechos: trabajo decente \(2020\)](#) presentado hoy por FOESSA
- Un 41,6% de los trabajadores a tiempo parcial trabajan menos horas de las que querrían
- La plataforma Iglesia por el Trabajo Decente pide avanzar hacia un sueldo mínimo de 1.166€/mes (60% del sueldo medio) y facilitar la conciliación laboral

Barcelona, 07 de octubre de 2020 – Con motivo del siete de octubre, día mundial por el Trabajo Decente, **una treintena de personas se han concentrado esta tarde bajo el lema Trabajo y COVID, escogamos otro camino.** Por cuarto año consecutivo, la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente ha convocado este acto público, con la voluntad de denunciar que **no todas las personas tienen las mismas oportunidades laborales, y que la COVID-19 ha agravado aún más la precaria situación de muchos colectivos.**

Por medio de un camino trazado en el suelo, **cinco personas han ido encontrando obstáculos para llegar hasta la posición deseada. Estos obstáculos han sido desde la conciliación laboral, la falta de experiencia, el desconocimiento de la lengua o la brecha digital, entre otros.** La acción ha querido demostrar que la COVID-19 ha empeorado las expectativas laborales de los colectivos más desfavorecidos, **poniendo especial énfasis en las familias monoparentales, las personas jóvenes, las migrantes o las mayores de cincuenta años.**

"Llueve sobre mojado"

La Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente ha destacado que la COVID-19 es un factor que ha empeorado las perspectivas laborales de muchas familias, pero que la precariedad laboral ya estaba presente antes de la pandemia. **"Llueve sobre mojado. El último informe FOESSA ya nos advertía que en Catalunya había 1,5 millones de personas en situación de exclusión social. Se salió de la última crisis económica por la puerta trasera, y la COVID-19 solo ha agravado un mercado laboral que ya era precario"**, ha indicado Dessirée Garcia, responsable de formación e inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2020, el número de parados en Catalunya se situó en 472.900, 41.600 más que el mismo trimestre del año anterior (9,6%). **"El impacto de esta crisis es y será más intensa en los trabajadores precarios. La destrucción de empleo se ha concentrado en los asalariados con contrato temporal, que han caído un 19% interanual, y actualmente hay 112.700 hogares en Catalunya sin ingresos, un 3,7% más que el mismo trimestre del año anterior"**, han indicado desde la Plataforma.

Quando el trabajo no garantiza una vida digna

Durante el acto de esta tarde, se han recordado los datos que ha presentado FOESSA, con el informe *Vulneración de derechos: trabajo decente (2020)*.



El informe indica que **906.500 personas viven en hogares donde el sustentador principal se encuentra en Inestabilidad Laboral Grave** (haber estado parado durante 3 meses o más, haber tenido 6 o más contratos, haber sido contratado por 3 o más empresas, o trabajar sin contrato ni prestaciones a la Seguridad Social). Son el 11,7% de los hogares catalanes, y **hay graves dificultades económicas en todos los ámbitos. La mitad de las familias en esta situación afirma que no disponen de dinero para afrontar gastos imprevistos, y casi un 24% afirman haber sufrido amenazas de cortes de suministros en la vivienda.**

Una solución consensuada

Ayer mismo, la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente organizó una mesa redonda con la participación de patronal, sindicatos y administración pública. El acto celebrado en la sede de Cristianisme i Justícia contó con la participación del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies Chakir El Homrani, Toni Mora, en representación de CCOO, UGT y USOC y Ángeles Tejada, de Fomento del Trabajo. El acto tuvo como introducción el diagnóstico de la situación actual para las personas en situación de vulnerabilidad, presentado por Miriam Feu, responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Diocesana de Barcelona. **"La tasa de desempleo subiría del 12,8% hasta el 22% si tuviéramos en cuenta también las personas que ya no buscan trabajo porque piensan que no la encontrarán, las personas afectadas por un ERE y las personas con parcialidad involuntaria"**, indicó Feu. El catedrático Antón Costas, que moderó el acto, confirmó que la tasa de paro sistemáticamente elevada y la precariedad implican una infrutilización del trabajo que no nos podemos permitir como sociedad, porque es un gran desperdicio. El acto **sirvió para que todos los actores implicados en la gestión del mercado laboral hicieran un diagnóstico compartido de la situación.** Toni Mora pidió que el **Gobierno del Estado derogue cuanto antes la reforma laboral, y que es necesario un modelo fiscal progresista que ponga a las personas en el centro. "La RGC y el IMV deben confluir, las personas no pueden esperar meses a saber si su resolución para percibir las ayudas ha sido aprobada o no"**, apuntó el representante sindical. Por su parte, Ángeles Tejada presidenta de la comisión de Relaciones Laborales de Fomento del Trabajo indicó que **el teletrabajo no ha sido idóneo en las condiciones que se ha tenido que implementar, pero que ha puesto de manifiesto las carencias de nuestro mercado de trabajo.**

Finalmente, el Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies Chakir El Homrani agradeció a la Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente la organización del acto, y advirtió que **un mercado de trabajo que expulsa a los jóvenes, a los mayores de cincuenta años, los migrantes ya las mujeres no cumple con el contrato social. "El trabajo es sinónimo de vida digna, y la situación actual no nos sitúa en este supuesto"**, dijo. El consejero puso de relieve que el **impacto de la COVID-19 no es neutro, ya que ninguna crisis anterior había afectado con tanta dureza a la economía sumergida, que es el cojín de las personas más vulnerables. El Conseller hizo una defensa explícita de las personas migrantes, indicando que habría que flexibilizar el reglamento de extranjería para facilitar los permisos de trabajo. "Tres meses de contrato y un año de residencia deberían ser suficientes para conseguir los papeles y vivir y trabajar en nuestro país. Sería la mejor manera de eliminar la invisibilización de las personas migrantes"**, indicó.

